

CRONICA DEL MES

JULIO

Ernesto Cruz Alfaro

El eje de desarrollo del proceso político salvadoreño durante el mes de julio siguió dominado por las vicisitudes del proceso de diálogo. Los primeros días del mes fueron escenario de un intenso forcejeo político entre el gobierno y el FDR-FMLN en torno a la mecánica para reanudar las conversaciones. El día 1, monseñor Rivera, intermediario en el proceso, partió a Sudamérica en lo que se suponía ser una gira de 3 semanas, lo cual arrojó dificultades adicionales a los ya tensos intercambios entre las partes, al delegar la tarea de intermediación en manos de su obispo auxiliar, monseñor Gregorio Rosa Chávez, acusado por el FDR-FMLN de mantener una posición parcializada en favor del gobierno.

Sin embargo, los Frentes no descuidaron esfuerzos para mantenerse en contacto con monseñor Rivera. El 3 de julio, los dirigentes del FDR, Guillermo Ungo y Rubén Zamora, se entrevistaron con él en Bogotá, para reiterarle "nuestro deseo de que el diálogo se realice lo más pronto posible" y sondear mecanismos que tanto los Frentes como el gobierno de Duarte pudieran aceptar. Una semana después, el 11 de julio, el FDR-FMLN dio a conocer un "Proyecto político para poner fin al conflicto."

El proyecto contenía 6 puntos básicos. En primer lugar, reiteraba que la solución del

conflicto debía buscarse y acordarse entre salvadoreños, para asegurar al pueblo salvadoreño "su derecho a la autodeterminación." El segundo punto abordaba la cuestión del pluralismo que debería existir en el gobierno que surgiera de la solución política. El tercer punto proponía un cese al fuego al recomponerse el gobierno. En su cuarto punto, el documento sugería diversas medidas encaminadas a estructurar un "régimen económico justo." Entre ellas, proponía la derogación del "paquete económico" en aquellas disposiciones que lesionan los intereses de las mayorías y el desarrollo de un sistema de economía mixta que respete el derecho de propiedad privada y libre empresa de quienes se comprometieran con la solución política. El quinto punto sugería algunas condiciones para garantizar la democracia y el rescate de los derechos humanos. Finalmente, en su sexto punto, relativo a la política exterior, el documento proponía que el gobierno que surgiera de la solución política asegurara una política de no intervención y autodeterminación y propiciara "relaciones amistosas y de mutua colaboración con Estados Unidos, basadas en la igualdad de derechos y el mutuo respeto a la soberanía e independencia."

Ante la interpretación que el gobierno salvadoreño hizo del proyecto, considerándolo como

una propuesta para discutir en la tercera ronda de conversaciones, Rubén Zamora aclaró que el documento no constituía “una propuesta propiamente hablando para la próxima reunión de diálogo,” sino un marco de discusión dirigido a todos los sectores del país para que expusieran su posición sobre el conflicto y el proceso de diálogo como alternativa de solución al mismo. Zamora indicó que “obviamente, no esperamos que todas las fuerzas van a estar de acuerdo con los seis puntos, pero de esto se trata, de que haya una base para la discusión.”

El proyecto fue bien recibido incluso por sectores que habían mantenido una posición de desconfianza e incluso de confrontación con el FDR-FMLN. Monseñor Rosa comentó que el documento le parecía “mucho más moderado” que otros planteamientos anteriores del FDR-FMLN, y admitió “una serie de cambios en la postura de los Frentes: hablan de la empresa privada, hablan de Estados Unidos y de relaciones amistosas con ellos; no hablan de derogar la Constitución y plantean como un problema a estudiar lo de los dos ejércitos.” El secretario general del PCN, Hugo Carrillo, calificó el documento de “flexible” y consideró “natural” el rechazo del FMLN a deponer las armas mientras se desarrollaba el diálogo, “ya que ésa es una garantía para el FMLN de que lo pactado se va a cumplir.” El presidente Duarte, en cambio, declaró que “el documento es exactamente el mismo presentado en Ayagualo, sólo que con diferente lenguaje. Hacen un planteamiento en el cual mantienen la tesis de Villalobos de que no reconocen la Constitución, ni la Fuerza Armada, ni las elecciones ni la democracia.”

Indignado por la reticencia del FDR-FMLN a reconocer la legitimidad de su mandato presidencial, Duarte se fue enredando cada vez más en su fraseología demagógica. El 12, al efectuar una visita a San Francisco Gotera (Morazán), fue acometido en la cancha deportiva de la localidad por un nuevo arrebato de espontaneísmo, y retó a voces a “los máximos dirigentes políticos del FMLN-FDR para que respondan a lo que voy a decirles de lo que el pueblo espera de ustedes... al comandante Villalobos le digo que quiero tenerlo frente a frente para decirle lo que el pueblo quiere... espero tener frente a frente a Shafick Handal y a Ungo, porque no quiero hablar con subalternos sino con la máxima dirigencia.”

Con serenidad y moderación, el FDR-FMLN respondió a los gritos del mandatario en

un comunicado, en el cual lo emplazaban a un debate “frente a las cámaras de televisión y en cadena nacional de radio, para que discutamos ante la nación nuestras respectivas ideas y planteamientos en relación a los más importantes temas de interés nacional.” A tal efecto, los Frentes proponían un cese al fuego por 48 horas o durante el tiempo que durase el debate y sugerían la formación de una comisión mixta integrada por dos representantes de cada parte, que coordinaría la transmisión del debate y fijaría lugar, fecha y hora de su realización. Atendiendo la sugerencia del mandatario, la delegación revolucionaria estaría integrada por Guillermo Ungo, Rubén Zamora, Joaquín Villalobos y Shafick Handal. A su vez, Duarte debía designar tres altos funcionarios para que lo acompañaran.

Las primeras reacciones gubernamentales a la propuesta fueron de absoluto rechazo. El ministro de cultura, Julio Adolfo Rey Prendes, indicó que “ésta es una propuesta para una competencia, para ver quien hace más publicidad, quién habla mejor y quién le ofrece cosas bonitas al pueblo. Dentro del espíritu del diálogo eso no es posible, porque lo que estamos buscando es privacidad.” El ministro de defensa, general Vides Casanova, puntualizó que “la Fuerza Armada no está autorizada para estar debatiendo con nadie, con la guerrilla, ni con sacerdotes, con nadie, aspectos constitucionales. La Fuerza Armada está constituida, no para debatir, sino para combatir a esos elementos terroristas y subversivos.”

Posteriormente, el viceministro de comunicaciones, Roberto Viera, matizó la imagen pública de intransigencia mostrada por el gobierno, y presentó una contrapropuesta que condicionaba la aceptación gubernamental del debate a que el cardenal Obando actuara como moderador y a que el debate se efectuara en el local del diario *La Prensa*, en Managua, desde donde sería transmitido por radio y televisión a toda Centroamérica. Viera arguyó que de esta suerte se evitaría que el debate se convirtiera en una “movilización de masas,” como ocurriría si se realizara en San Salvador.

No sólo el FDR-FMLN rechazó tal contrapropuesta, calificándola de “burla al pueblo salvadoreño.” También monseñor Rivera, recién llegado de Sudamérica —adelantó una semana el retorno—, comentó que la sugerencia del viceministro le parecía “poco seria.” El pro-

pio vicepresidente y canciller, Rodolfo Antonio Castillo Claramount, se vio urgido a aclarar que el planteamiento de Viera "no tiene sentido oficial."

El proyecto político del 11 de julio y la propuesta del debate público no fueron las únicas iniciativas emprendidas por el FDR-FMLN para favorecer el avance del diálogo. Junto a ellas, como un mecanismo complementario a las gestiones para la tercera ronda, Radio Venceremos difundió el 23 un comunicado en el cual los Frentes proponían "realizar un canje amplio y simultáneo, de buena voluntad, que consistiría en que el gobierno de Napoleón Duarte ponga en libertad a todos los dirigentes sindicales, trabajadores, miembros de organismos humanitarios y los heridos y que ponga en libertad a todos los no combatientes que guardan prisión. El FMLN se compromete, por su parte, a poner en libertad inmediatamente al coronel Omar Napoleón Avalos. Los mecanismos simultáneos se verificarán a través del intermediario." El mismo día, el FMLN envió a los canales de televisión un videocassette en el cual el coronel Avalos aseguraba haber recibido un trato respetuoso a lo largo de su cautiverio y solicitaba al presidente Duarte y a sus compañeros de armas acceder a la propuesta de canje, "pues me he mantenido y me mantengo fiel a nuestros principios." Seis días después, la superioridad de la Fuerza Armada manifestó que "una vez conocidas las demandas de las organizaciones marxistas, esta comandancia general estará dispuesta a considerar la posibilidad adecuada para encontrar la solución al caso, dentro de los preceptos legales y de los principios de humanidad que deben ser observados y respetados."

El 31, monseñor Rivera viajó a Morazán con el doble propósito de entrevistarse con Avalos y transmitir al FMLN una nueva contrapropuesta del gobierno para la realización de la tercera sesión de diálogo. La contrapropuesta sugería que el encuentro se realizara el 29 de agosto en la catedral de San Miguel o, alternativamente, en San Francisco Gotera; el gobierno se comprometía a garantizar las medidas de seguridad necesarias para el ingreso y alojamiento de los delegados revolucionarios, y proponía que el CICR se encargara de trasladarlos a San Miguel, donde una representación diplomática europea velaría por ellos.

No obstante las dificultades para concertar los procedimientos operativos de la tercera ron-

da, el clima de la discusión pública en torno al diálogo siguió ampliándose. El 2 de julio, el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, informaba que su partido había sostenido un par de reuniones con dirigentes del PDC para intercambiar impresiones sobre el proceso e intentar la formulación de una propuesta de paz que contara con el consenso de todos los sectores. El mismo día, Hugo Carrillo informó que el consejo ejecutivo del PCN contaba con el apoyo de sus bases para discutir el problema del diálogo "no sólo con ARENA o el PDC, sino también con la empresa privada, campesinos, sindicalistas, etc." Carrillo agregó que "en la única reunión que hemos sostenido con el PDC, hemos tenido cambios de impresiones sobre la situación nacional, buscando puntos de convergencia."

Incluso la Cruzada Pro-Paz y Trabajo se aventuró a realizar el 19, en el Hotel Sheraton, un foro de discusión sobre el diálogo, en el cual participaron como expositores la doctora María Julia Castillo (PAISA); el cacique de ANIS, Adrián Esquino Lisco; el ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria (CCIES), José Antonio Rodríguez Porth; el dirigente de la UPD, Ramón Aristides Mendoza; y el Mayor D'Aubisson (ARENA). El ministro de cultura, quien había sido invitado para exponer la posición gubernamental, no se presentó. Tampoco asistió monseñor Rosa, invitado como observador.

Obviamente, el acercamiento del PDC a la derecha y sus intentos de congraciarse el apoyo de la empresa privada para enfrentar el proyecto político del FDR-FMLN, no facilitaron el entendimiento del gobierno con el movimiento laboral. El 5 de julio, con ocasión del día internacional del cooperativismo, la Confederación de Asociaciones Cooperativas (COACES) realizó una manifestación en demanda de la continuación de la reforma agraria y de la reanudación del diálogo. El 8, la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) convocó a un paro indefinido de labores en el ISTU, DUA, alcaldía de San Salvador y los ministerios de agricultura y de salud, como medida de presión para recibir respuesta satisfactoria del gobierno a la plataforma reivindicativa acordada en noviembre pasado. Dos días después, 5.800 empleados del hospital central y de las unidades periféricas del ISSS en todo el país efectuaron un paro de labores de 8 horas en demanda de un aumento salarial de 200 colones y de otras prestaciones que la dirección

del ISSS se había comprometido a otorgar, sin cumplir su promesa.

La presión en favor del diálogo siguió constituyendo un eje fundamental de la movilización laboral. El 10, la Unidad Popular Democrática (UPD) solicitó públicamente al gobierno la incorporación de dos miembros de su comité central a la comisión oficial que acudiría a la tercera sesión de diálogo. Pocos días después, ACOPAI planteó una solicitud en el mismo sentido. El 13, la UNTS realizó en el auditorium de la UCA su asamblea general "Alternativas para la paz y reconstrucción nacional," la cual contó con la participación de unos 450 delegados quienes acordaron, entre otras tareas a realizar en el corto plazo, promover el debate nacional sobre el diálogo y designar una delegación para participar en las próximas rondas de conversaciones entre el gobierno y el FDR-FMLN.

Muestra significativa del grado de cohesión alcanzado por la organización sindical lo fueron las presiones desplegadas para la liberación de Febe Elizabeth Velásquez, secretaria general de la subseccional CIRCA, de STITAS, secretaria de relaciones nacionales e internacionales de FENASTRAS, miembro del comité ejecutivo de la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) y miembro de la comisión de relaciones de la UNTS, capturada el 7 de julio por "hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que la introdujeron violentamente en un microbús." Ante la masiva movilización sindical generada por la captura, la dirección de la Policía de Hacienda se vio forzada a responsabilizarse de la detención, explicando que la sindicalista se encontraba "en vías de investigación" bajo la acusación de ser "correo" de las FARN.

A la denuncia de CIRCA, difundida la tarde del mismo día de la captura, el 10 de julio hubo una movilización de FENASTRAS por las calles de San Salvador, así como numerosas manifestaciones de solidaridad y amenazas de paros progresivos si Febe no era liberada, por parte de diversas organizaciones sindicales, tanto del sector público como de la empresa privada. La ola de protestas persuadió al presidente Duarte que la medida más prudente era la liberación de la dirigente sindical. Acompañado del secretario privado de la presidencia, Duarte se presentó al mediodía del 11 en el local de FENASTRAS para entregar personalmente a Febe Elizabeth. El mandatario calificó el acto de "histórico" y lo interpretó como "una muestra de distensión del

gobierno en busca de mecanismos hacia el diálogo y la conciencia del alto mando de la Fuerza Armada un proceso que se da dentro del marco constitucional." Menos consideraciones, en cambio, mostró la Fuerza Armada pocos días después con un grupo de 23 religiosos extranjeros (19 estadounidenses, 2 canadienses y 2 austriacos), deportados por acompañar a 132 familias campesinas que intentaban repoblar la cooperativa de El Barillo, en el cantón Aguacayo (Cuscatlán). Por otra parte, la liberación de Febe Elizabeth suscitó los reclamos rabiosos de la derecha, especialmente de ARENA, cuyo jefe de fracción ante la asamblea legislativa, Armando Calderón Sol, expresó que al liberar a la sindicalista "sin esperar la resolución de un juez militar," Duarte estaba pisoteando "las instituciones jurídicas y las leyes del país."

Sin poder ofrecer al país nada significativo, la asamblea legislativa inició el 15 de julio el calendario de lectura de las memorias de labores de las distintas secretarías de Estado para el período 1985-86. Ese día presentaron sus informes las carteras de obras públicas, comercio exterior, justicia, planificación, interior y la procuraduría general de la república. Al día siguiente pasaron los ministerios de salud, economía, educación, trabajo, agricultura y hacienda, y la fiscalía general. Finalmente, el 17 rindieron sus informes los ministros de defensa, cultura y de la presidencia, y los presidentes del BCR y de la corte de cuentas. Este mismo día, a propuesta del consejo de ministros, la asamblea aprobó la prórroga por 30 días más del estado de sitio, excepto en los artículos 5; 12, inciso 2o.; 13, inciso 2o.; y 24.

El informe del general Vides Casanova, correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986, constituyó de alguna manera un reflejo de la marcha de la guerra. El ministro informó que, en dicho período, la Fuerza Armada sufrió en sus filas 477 muertos, 2.482 heridos y 50 "desaparecidos," y causó al FMLN 1.457 muertos, 607 heridos y 1.511 capturados, además de 856 rebeldes que se habrían entregado al ejército. Asimismo, Vides indicó que la Fuerza Armada realizó 86 operaciones mayores, 23 menores, 37 helitransportadas, 35 permanentes, 11.673 patrullajes, 15.599 emboscadas y 20.816 retenes. Por otra parte, informó que el Instituto de Previsión Social de la institución (IPSFA) entregó 15.2 millones de colones en concepto de pensiones, 12.5 millones por seguros de vida, 3.1 millones como fondos de

retiro y 734 mil colones para auxilios de sepelio. Durante el mismo período, se decretaron 62 ascensos a jefes militares, 385 a oficiales y 54 para clases, y se realizaron 251 cursos de perfeccionamiento y capacitación para jefes, oficiales, cadetes y tropa.

El mes de julio se abrió con una intensa actividad militar. El 2, unidades conjuntas de las segunda y cuarta brigada de infantería, apoyadas por unidades de artillería y la fuerza aérea, iniciaron un nuevo operativo en la zona limítrofe de Santa Ana-Chalatenango. El mismo día, efectivos del cuarto destacamento militar del batallón Arce y de la tercera brigada de infantería iniciaron el operativo "Teniente Ismael Villacorta" en el norte de Morazán, registrándose fuertes combates en la zona de Cacaopera, Osicala y Joicoaitique, así como en los alrededores de Arambala, Cacahuatique y sur de Perquín. El 8, el comandante departamental de Morazán, coronel Mauricio Ernesto Vargas, indicaba que se estaba registrando de 2 a 3 enfrentamientos diarios en el norte del departamento.

En la zona central del país, también el 8, el ejército efectuó fuertes bombardeos sobre posiciones guerrilleras ubicadas en Aguilares, el norte de Quezaltepeque y en el área de San Juan Opico. El 10 se inició la séptima fase de la operación "Teniente Ricardo Chávez Carreño" en la zona de Las Vueltas, La Laguna y Ojos de Agua (Chalatenango); el mismo día, la Fuerza Armada envió al área de Guazapa tropas de refuerzo para la continuación de la operación Fénix. A mediados del mes, fuentes militares informaban que el ejército se encontraba desarrollando 8 operaciones de contrainsurgencia, con participación de 16 mil efectivos, en los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Usulután y Morazán.

El 18, la Fuerza Armada inició operaciones militares en el área del Lempa, Berlín y sur de la presa San Lorenzo; en el curso de ellas fue desmantelado un campamento guerrillero conocido como "Cueva de los vampiros," considerado el más importante en el área de Berlín, pues de él salían los zapadores que sabotaban el tendido eléctrico en Chinameca, Jucuapa, El Triunfo y Mercedes Umaña. Simultáneamente, la Fuerza Armada inició las maniobras "Guardianes del Golfo 3" en el golfo de Fonseca y la bahía de Jiquilisco, con el propósito de frenar el aprovisionamiento de armas del FMLN; y siguió desarrollando operaciones con unidades medianas

en el área de Guatajiagua y Cacaopera, así como en el norte de San Miguel.

La amplitud de los operativos, con todo, no surtió efectos significativos en términos de golpear severamente las filas del FMLN. Al finalizar el mes, COPREFA informó de 58 muertos y 89 heridos en las filas guerrilleras, resultado más bien modesto en relación a lo que pudiera haberse esperado de los operativos. En cuanto a material bélico decomisado, COPREFA informó que se había incautado al FMLN 85 fusiles, 21 lanzagranadas *Law*, 1 lanzagranadas M-79 y diversos accesorios bélicos. Por su parte, Venceremos informó que el FMLN había causado 407 bajas al ejército, 101 de ellas por explosión de minas y 56 por emboscadas.

Sin descuidar la ejecución de la guerra en el campo de batalla, la Fuerza Armada hizo esfuerzos especiales para recobrar ante la opinión pública la multidimensionalidad del conflicto. El 23 de julio, al visitar el cantón El Almendro, en Suchitoto, acompañado de representantes de ANEP, la ASI y CONARA, el general Adolfo Blandón informó que la Fuerza Armada pretendía profundizar el plan "Unidos para reconstruir," porque "esta guerra no se resuelve con fusiles ni cañones, sino con la confianza de los habitantes. Esta guerra no es para conquistar territorios, sino la mente de la población." El 28, en una nueva conferencia informativa, Blandón distribuyó a la prensa un documento en el cual se explicaba que el plan formaba parte del plan global del gobierno hacia la paz y había sido diseñado para "oponer a la concepción marxista-leninista una concepción democrática." Asimismo, enfatizó que "no se debe pensar ahora en votos ni en personas, ni en partidos políticos, sino en el objetivo común que es la paz."

Mientras Blandón exhortaba a la unidad del país, la disputa legislativa en torno al caso de Patria Libre evidenciaba las profundas contradicciones secundarias existentes al interior de la derecha. El resorte que desencadenó la polémica fue accionado cuando la fracción democristiana en la asamblea decidió convocar a los miembros del Consejo Central de Elecciones (CCE) para que explicaran por qué no se había inscrito todavía a Patria Libre, a pesar de haber entregado este partido varios miles de firmas más que las solicitadas por el consejo. La disputa mostró las presiones de ARENA y del PCN para obstaculizar la inscripción de Patria Libre, aduciendo que éste había falsificado firmas, afrontaba dificulta-

des de carácter estatutario y adolecía de problemas de centralización de la organización. En el intercambio de acusaciones, salió a relucir también el bloqueo ejercido por el gobierno, secundado por la AID y la embajada norteamericana, para atrasar la elaboración del registro electoral requerido para las elecciones de 1988.

En el ámbito regional, los primeros días de julio presenciaron el repudio generalizado de la comunidad internacional a la aprobación de la ayuda a los contras por parte del congreso norteamericano. No obstante, las protestas del mundo democrático no hicieron desistir al gobierno de Reagan de sus propósitos intervencionistas en Nicaragua. Entre el 10 y el 12 de julio, el enviado especial de Reagan para Centroamérica, Philip Habib, hizo un nuevo viaje por la región, excluida Nicaragua. Según admitió el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Elliot Abrams, el objetivo de Habib consistía en "instar a los cuatro gobiernos aliados de Estados Unidos a mantenerse unidos frente a Nicaragua."

El gobierno nicaragüense, sin embargo, no perdió su fe en los canales internacionales legales para manejar el conflicto regional. El 28, forzada por el agotamiento de las vías de negociación bilateral con sus vecinos, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de La Haya sendas demandas contra los gobiernos de Honduras y Costa Rica, acusándolos de complicidad con la política de agresión de Estados Unidos al facilitar sus respectivos territorios para base de operaciones de los grupos contrarrevolucionarios. Junto a ello, Nicaragua solicitó nuevamente una reunión del consejo de seguridad de la ONU. En la apertura de sesiones, el día 29, el presidente Daniel Ortega acusó al gobierno de Reagan de "reemplazar el derecho por la ley de la selva" y exhortó a Estados Unidos a "recapacitar y ajustar su conducta a los principios y normas del de-

recho internacional." Al mismo tiempo, reiteró la disposición de Nicaragua a reiniciar un diálogo bilateral con el gobierno norteamericano y solicitó al consejo de seguridad su apoyo a la corte internacional para que "la frágil estructura del derecho internacional no sufra un golpe mortal."

Por su parte, el embajador norteamericano ante la ONU, Vernon Walters, reafirmó que la corte de La Haya no disponía de competencia para juzgar sobre el problema centroamericano. En apoyo de Walters, el representante salvadoreño, Roberto Meza, opinó que "el veredicto de la corte se basa en un análisis parcial de un problema más amplio" y añadió que "hay foros más apropiados que el consejo de seguridad para discutir este tema." Como era de esperarse, Estados Unidos vetó el proyecto de resolución del consejo, en el cual se formulaba una "urgente y seria llamada para la inmediata aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia."

En el mismo marco de la política exterior norteamericana hacia la región, el presidente José Azcona Hoyo visitó El Salvador el penúltimo día de julio, atendiendo una invitación del presidente Duarte. El aparatoso protocolo de bienvenida montado por el gobierno salvadoreño resultó desproporcionado a los magros frutos de la visita. El 31 de julio, Duarte y Azcona Hoyo suscribieron una declaración conjunta, en la cual reiteraron su adhesión a la declaración de Esquipulas, reafirmaron su determinación de cumplir con el Tratado General de Paz y se comprometieron a explorar y promover proyectos conjuntos de desarrollo. La reminiscencia de Esquipulas, sin embargo, no les impidió censurar "la indiscutible vocación totalitaria y belicista" de Nicaragua, "reflejo de un delirio de persecución que no conoce sosiego y de un expansionismo que busca desestabilizar sin tregua la región centroamericana."